

trito del Estado de Morelos.—Doy fé.—*Mariano Sansalvador*.—Rúbrica.—*José Anastasio Rego*, secretario.—Rúbrica.

Es copia que certifico. Cuernavaca, Julio 2 de 1873.—*José Anastasio Rego*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Julio 31 de 1873.—Visto el juicio de amparo que con fecha 21 de Junio último promovieron en la ciudad de Cuernavaca, ante el Juez de Distrito del Estado de Morelos, José Ortiz de Rosas, José Morgado, Joaquín Sarabia, Luis Vega y Rafael M. Conde, contra el veredicto de un jurado de imprenta y procedimientos del Ayuntamiento de dicha Ciudad que, en concepto de los promoventes, violan en su persona las garantías otorgadas por los artículos 13, 14, 19 y 20 de la Constitución federal; porque afirman se les ha juzgado como responsables de un impreso en que se ataca el orden público y se ofende al Gobernador del Estado, impreso que no se reimprimió en aquella Ciudad, de que ellos no son los autores ni se les debió aplicar la ley de imprenta; ni debiendo aplicárseles se les procesó debidamente, y por haber durado su detención mas del tiempo debido.—Vistas las constancias de autos, y teniendo en consideración la sentencia del Juez de Distrito, en la que se concede el amparo á los quejosos, por cuanto á que primero: imputándose á éstos el cargo de circuladores del impreso referido y ser este anónimo, sin la constancia del lugar de la impresión y de la imprenta, el procedimiento judicial practicado, no es el legal, así como el veredicto del jurado que pasando de la calificación de responsabilidad, á la de culpabilidad, se pronunció sin la defensa correspondiente, y segundo porque á los acusados se les ha detenido en prisión mas del término debido, estando solo en suspenso con calidad de provisional esa de-

tención.—Por los fundamentos expuestos, que demuestran la violación de las garantías individuales reclamadas, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869 se resuelve: Se confirma la sentencia del Juez de Distrito del Estado de Morelos, pronunciada á 2 de Julio próximo pasado, declarándose: que la Justicia de la Unión ampara y protege á José Ortiz y Rosas, José Morgado, Joaquín Sarabia, Luis Vega y Rafael Conde contra los actos que originaron el presente recurso de amparo.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias*.—*Pedro Ogazón*.—*Juan J. de la Garza*.—*José M. Lozano*.—*José Arteaga*.—*Pedro Ordaz*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*J. M. del Castillo Velasco*.—*S. Guzmán*.—*L. Velasquez*.—*José García Ramírez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 18 de Agosto de 1873.—*Lic. Agustín Peralta* oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, por Francisco Chavez contra la sentencia ejecutoria que lo condenó á la pena de muerte por el delito de plagio.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que Francisco Chavez promovió en 15 de Abril del pre-

sente año, el recurso de amparo contra el proceso que se le formó por el delito de plagio, y contra las sentencias pronunciadas en primera y segunda instancia, condenándolo a la pena de muerte, de conformidad con las prescripciones del decreto número 8 del segundo Congreso constitucional del Estado. Cumpliendo con lo mandado en el artículo cuarto de la ley de 20 de Enero de 1869, en el escrito de queja se expresa, que la procedencia del recurso se funda en la primera y tercera fracción del artículo primero de la ley citada, señalando como violada la garantía individual consignada en el artículo 23 de la Constitución Federal é invadida la esfera del poder Legislativo de la Unión, porque el decreto número 8 de que se ha hablado, se opone al artículo número 127 de la Carta fundamental de la República. Además del amparo de la Justicia Federal, se pidió la suspensión inmediata de la ejecución de la pena de muerte, que fué concedida, librando orden para este efecto, al C. Juez de lo Criminal de esta Ciudad, quien estaba encargado por el Juez tercero popular de Celaya para ejecutar la sentencia pronunciada por la segunda Sala del Supremo Tribunal del Estado.

Suspendido el acto reclamado, informó la autoridad que se designó como ejecutora, acompañando como justificante copia del exhorto del C. Juez tercero popular de Celaya, en el que se inserta el fallo en la última instancia del proceso. El Promotor fiscal, al evacuar el traslado prevenido en el artículo noveno de la ley orgánica citada, se reservó pedir sobre el punto principal del juicio en el término para alegar, porque en el estado que guardaban las actuaciones, no ministraban datos bastantes para determinar sobre el amparo solicitado, siendo preciso recibir á prueba el juicio. Durante este término, se pidieron algunas constancias de la causa, que concluido, el Juzgado por equidad mandó que se recabaran y se agregaran á los autos.

El primer fundamento de la procedencia

del presente recurso, es la violación del artículo 23 de la Carta fundamental de la República, que se hace consistir en que según este artículo no puede aplicarse la pena de muerte á otros delitos que los exceptuados en el mismo, entre los cuales no se enumera el plagio; deduciendo que en la persona del quejoso, al ser sentenciado á muerte por este delito, se ha violado la garantía individual que se comprende en dicho artículo constitucional. Francisco Chavez fué juzgado y sentenciado siguiendo las prescripciones del decreto número 8 del segundo Congreso del Estado, por que en la época en que tuvo lugar el plagio que se le atribuye, no estaban suspensas las garantías individuales para saltadores y plagiarios. Según el informe del Supremo Tribunal del Estado, el delito que motivó el proceso de que se trata, se verificó en 19 de Junio del año próximo pasado, en cuya fecha había cesado de estar vigente la ley de 18 de Mayo de 1871 y aun no empezaba á regir la de 23 de Mayo de 1872, por no haberse publicado en el Estado sino hasta el 11 de Junio del mismo año. Juzgado Francisco Chavez por los Tribunales comunes, fué sentenciado á la pena de muerte, siendo el fundamento de las dos sentencias, la del C. Juez tercero popular de Celaya y la del Supremo Tribunal del Estado que causó ejecutoria, los artículos 1 y 2 del decreto número 8 del segundo Congreso constitucional del mismo, y los correlativos del Código penal.

El primero de dichos artículos define el delito de plagio y el segundo dice: "Los que cometieren en el Estado este crimen, serán reputados como saltadores de caminos, y castigados con la pena de muerte que se les impondrá por los Jueces comunes." Según este artículo, en el Estado todo plagiario debe considerarse como saltador de caminos, y como el artículo 23 de la Constitución, permite que á estos últimos se les aplique la pena de muerte, es preciso examinar, si conforme á los principios de Legislación penal y atendiendo al sentido de las pala-

bias, el plagiarlo es saltador de caminos. Las leyes de Partida vigentes, en la época en que se promulgó la Constitución (vigente) política de la República, castigaban con iguales penas á los saltadores en camino y á los plagiarios, pero hacen distincion de estos dos delitos. Segun ellas y segun la significacion de las palabras, se entiende por saltador de caminos, al que roba y asalta precisamente en el camino. El artículo 23 de la Constitución, al decir saltador de camino, expresó el lugar en que era necesario que se cometiera el delito para que pudiera ser castigado con la pena de muerte, quedando derogadas las leyes que castigaban á los saltadores de otra clase, con la misma pena. El plagiarlo en consecuencia, podrá reputarse como saltador de camino, cuando el delito se ejecute en camino, de otra manera no puede decirse comprendido en el artículo 23 de la Constitución.

Pudiera objetarse que en las leyes emanadas del Congreso de la Union, suspendiendo algunas garantías individuales, se ha hecho esta declaracion y que ellas imponen la última pena no solo á los saltadores en caminos, sino tambien á otros casos de robo con asalto; pero estas leyes han suspendido la garantía individual de que se trata, y esta es la interpretacion que se deduce de una ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia que se registra en la página 385 del Semanario Judicial de la Federación. En consecuencia, el artículo segundo del decreto número 8 del segundo Congreso constitucional del Estado, supuesta la generalidad de los términos en que está redactado, puede oponerse al artículo 23 de la Constitución Federal, y en su aplicacion violarse la garantía individual que se consigna en dicho artículo, por que segun este decreto puede castigarse con la pena de muerte no solo al plagiarlo que haya cometido el delito en un camino, sino tambien al que lo haya verificado en otro lugar.

Lo mismo debe decirse respecto de la invacion que asegura el quejoso hizo el Con-

greso del Estado en las facultades del poder Legislativo de la Union. Si los plagiarios no siempre deben reputarse como saltadores de caminos, las Legislaturas de los Estados no pueden decretar que el delito de plagio debe ser castigado en todos casos con la pena de muerte. Esta declaracion importaría una adición á la Constitución ó la suspension de la garantía individual consignada en el artículo 23, que segun los artículos 29 y 127 de la misma Constitución no son atribuciones de las Legislaturas de los Estados. El Promotor fiscal, fundado en las razones que ha expuesto, cree que el Juzgado para decidir si debe conceder ó denegar el amparo que se solicita, tiene que examinar si el plagio cometido por Francisco Chavez fué en un camino ó en otro lugar, esto es si puede considerarse como saltador de caminos.

Las únicas constancias de la causa que se instruyó contra él, que obran en estas actuaciones, son las sentencias pronunciadas en primera y segunda instancia, el dictámen del Letrado que asesoró al C. Juez tercero popular de Celaya y un informe del Supremo Tribunal del Estado, acerca del día en que se ejecutó el delito. En la sentencia de segunda instancia lo mismo que en el dictámen del Asesor, se dice probada la existencia del delito entre otros datos, por que consta la preexistencia de Don Victoriano San Roman, que fué la persona plagiada, en la hacienda de los Morales y su desaparicion posterior; pero no expresan lo mismo que la sentencia de primera instancia, el lugar en que se cometió el delito.

Esta falta de prueba, hace presumir que tal vez en la causa, no se fijó esta circunstancia ó que no pudo averiguarse; por que en concepto del que suscribo, siendo de tanta trascendencia que puede hacer variar de una manera tan notable la pena que debe aplicarse al reo, los jueces debieron considerarla y fundar su fallo en que el hecho principal hubiera estado acompañado de la

circunstancia de haberse verificado en un camino.

El Juzgado obraría con prudencia si de la misma manera que ha pedido informe al Supremo Tribunal sobre la fecha en que se cometió el delito, lo pidiera también acerca del lugar en que conste en la causa haberse ejecutado. Quizá considere bastantes para pronunciar su fallo las constancias que hasta ahora obran en las actuaciones, en cuyo caso, el Promotor fiscal cree que debe concederse el amparo que se solicita. El artículo 23 de la Constitución, exige que el robo con asalto que puede ser castigado con la pena de muerte, sea cometido en un camino; y como antes se ha procurado demostrar, el delito de plagio podrá reputarse comprendido en dicho artículo si ha sido perpetrado en un camino.

Los jueces que han juzgado y sentenciado al quejoso á la pena de muerte, supuesto el artículo ciento veintiseis de la misma Constitución, no pudieron dejar de tener en consideración esta circunstancia, que no solo en el presente caso sino en los demás delitos influye en la gravedad de la pena. Sin embargo, en la sentencia de primera y segunda instancia no se hace mención del lugar en que se cometió el delito, tal vez por que el decreto del Estado que normó los procedimientos de la causa y designa la pena que debe imponerse al reo, no considera esta circunstancia, y esta omisión aunque no es una prueba de la que pueda concluirse que el plagio que se le atribuye al quejoso se cometió en un lugar que no era un camino, si es de presumirse, supuesto el silencio que la ley del Estado que se aplicó en todos casos considera como saltadores de caminos á los plagiarios y en todos casos castiga á estos últimos con la pena de muerte.

El Promotor fiscal, teniendo presentes las razones que ha expuesto y que en este juicio el Juzgado tiene que decidir sobre una cuestión verdaderamente grave, por tratarse de la pena de muerte cuya aplicación de-

—TOMO IV.—PARTE II.

be restringirse según el espíritu de nuestras instituciones, suplico al juzgado, primero: Se sirva pedir informe al supremo tribunal del Estado, para mejor proveer, acerca del lugar en que se cometió el plagio por el cual fué sentenciado el quejoso á la pena de muerte, y según este informe, conceder ó denegar el amparo que se solicita. Segundo: En el caso que juzgue bastantes las sentencias que obran en las actuaciones para pronunciar sentencia definitiva, pronunciarla en sentido favorable al quejoso.

Guanajuato, Mayo 20 de 1873.—*José Aguilar y Córdova.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guanajuato, 23 de Mayo de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por Francisco Chavez contra la sentencia de muerte pronunciada por la segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la causa que se instruyó al quejoso por el delito de plagio, con cuyo acto cree el promovente violada en su persona la garantía que consigna el artículo veintitres de la Constitución, asegurando á la vez que la ley número ocho del congreso del Estado en que se funda aquella sentencia, invade la esfera de la autoridad federal; resultando, que el plagio de D. Victoriano San Roman, de cuyo delito está declarado reo el quejoso; acaeció en 19 de Junio del año próximo pasado, época en que habia cesado la suspensión de garantías, decretada por la ley de 18 de Mayo de 1861, exclusivamente para los saltadores y plagiarios, por cuya razón, y por no haber sido publicada en el Estado sino hasta el 31 de Junio de 1872, la ley de 23 de Mayo del mismo año que prorogó la citada de 18 de Mayo, se conceptuó que el conocimiento de este delito no era de la competencia de las autoridades políticas, sino de la del poder judicial del Estado, resultando que en primera y segun-

da instancia ha sido juzgado Chavez conforme á la ley número ocho de que se ha hecho referencia, y con sujecion á ella ha sido condenado á muerte por dos sentencias uniformes pronunciadas por el ciudadano juez de letras de Salvatierra y por la segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia.

Considerando: que esa ley número ocho, al imponer la pena de muerte al delito de plagio, no quebranta el artículo veintitres de la Constitución, porque diversas leyes emanadas del Congreso de la Union han declarado que el plagio está comprendido entre los casos á que dicho artículo permite aplicar la referida pena, cuyas leyes son las expedidas contra plagiarios y saltadores en 18 de Abril de 1869, 9 de Abril de 1870 y 18 de Mayo de 1871; además de las de 23 de Mayo de 1872 y 3 de Mayo de 1873, que no deben aducirse en estos autos, porque son posteriores al hecho criminal que se imputa al interesado.

Considerando: que la declaracion de que habla y que está contenida en el artículo segundo de las leyes mencionadas, no es un precepto transitorio sino permanente, como asientan los autores de la obra intitulada «Novísima Sala Mexicana,» página ochenta y tres, nota cuarta, y como se infiere de los artículos quinto de la ley de 18 de Abril de 1869, y sétimo de las de 9 de Abril de 1870 y 18 de Mayo de 1871, los cuales solamente para la suspension de las garantías á que se refiere el artículo primero de aquellas leyes y para la autorizacion que al ejecutivo se concede en el artículo cuarto, fijan la duracion de un año, ó la fecha precisa en que deberá usar la suspension y autorizacion enunciadas; pero no designan término alguno relativo á la vigencia de la declaracion del referido artículo segundo, cuya disposicion legal ha debido, por tanto, quedar subsistente aun despues de pasado el periodo de suspension de garantías para los saltadores y plagiarios y en consecuencia, estaba vigente (como lo está ahora) en

19 de Junio del año próximo pasado, fecha del plagio de D. Victoriano San Roman.

Considerando: que no se podría sostener con buenas razones, que por ser anterior á las leyes privativas contra los expresados delincuentes, la número 8 del Congreso del Estado ha venido á conculcar la Constitución, al decretar la pena de muerte contra el delito de plagio; puesto que tal raciocinio carece de solidez, ya porque la interpretacion que aquellas leyes dan al artículo 23 de la Constitución, siendo anterior al plagio de que se hizo cargo á Chavez, autoriza la pena de muerte que á este se impuso, ya porque desde 3 de Junio de 1861 se había fulminado la misma pena contra los plagiarios por un decreto del Congreso Nacional; y en esta virtud la citada ley número 8, que es posterior á dicho decreto, no hizo otra cosa que reproducir la pena que el Supremo Poder Legislativo de la República tuvo á bien señalar para los autores del execrable crimen de plagio.

Considerando: que la declaracion de estar comprendido este delito entre los que enumera el artículo 23 del Pacto Federal, no es una adiccion ni una reforma de las que prevee el artículo 127 del mismo Código; supuesto que tanto las adiciones como las reformas constitucionales, tienen por objeto corregir los defectos ó llenar los vacíos que el transcurso del tiempo haga notar en la ley fundamental del país; y la declaracion de que se trata, no se dirige á uno ni á otro de estos dos fines, sino á penetrar el espíritu y fijar le inteligencia de las palabras "saltador de caminos" y "piratería," de que usa el repetido artículo 23, pues así lo da á entender la iniciativa que el Ministerio de Gobernacion presentó al congreso de la Union en 18 de Diciembre de 1868, y así lo sostuvieron en su dictámen respectivo las comisiones unidas de gobernacion y puntos constitucionales, diciendo:.....entre los casos á que aplica (el artículo 23 de la Constitución) la pena de muerte, está comprendido el plagio, por no ser este otra cosa que un acto

pirático ó un atentado de salteadores, con circunstancias agravantes.

Considerando: que para definir por medio de una ley las palabras que emplea el texto de la Constitucion, es competente el Poder Legislativo Federal, porque tiene facultad para expedir todas las leyes que sean necesarias y propias para hacer efectivas las facultades que corresponden á los poderes de la Union, y una de las que pertenecen á los Tribunales de la Federacion, es la de resolver toda controversia que se suscite sobre el cumplimiento y aplicacion de las leyes federales (fraccion 30 del artículo 72 y 1º del artículo 97 de la Constitucion); de lo que se deduce, que el Congreso general ha podido constitucionalmente declarar lo que se entiende por salteador y por pirata, á fin de que los Tribunales federales puedan aplicar, en los casos de su competencia, el artículo 23 tantas veces citado.

Considerando: que de los razonamientos que proceden se concluye, que la ley número 8 de la Legislatura del Estado, al imponer á los plagiarios la pena de muerte, no ha infringido el artículo 23 de la Constitucion ni tampoco invadido la esfera de la autoridad federal, porque no ha estendido aquella pena á un delito que no esté comprendido en dicho artículo, ni ha decretado reforma ni adiccion alguna constitucional.

Considerando: que los fundamentos que quedan expuestos están de acuerdo con los que se vierten en la ejecutoria que obra á la foja 537 del tomo 2º del Semanario Judicial de la Federacion, y que recayó en el juicio de amparo promovido por Pantaleon Campos contra la sentencia de muerte pronunciada en su contra por el Juez de 1ª instancia de Colima; por tales consideraciones y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez de Distrito declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Francisco Chavez contra la Sentencia de muerte que le ha impuesto la 3ª sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el delito de plagio, ni contra la ley nú-

mero 8 del Congreso del mismo Estado, en la cual se funda la indicada Sentencia. Notifíquese este fallo á las partes, publíquese en el periódico Oficial y previa la debida citacion, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos legales. Así el nominado C. Juez de Distrito lo decretó, disponiendo se reponga el papel comun que se usó en estas actuaciones, con el sellado que corresponde, y firmó. Doy fe.—*Albino Torres.*—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato, Mayo 29 de 1873.—*Luis G. Medina.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Julio 31 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, por Francisco Chavez contra la sentencia ejecutoria que lo condena á la pena de muerte por el delito de plagio, y fué pronunciada por la 2ª Sala del Tribunal Superior de dicho Estado; el informe de la autoridad contra la que se ha intentado el presente recurso; lo alegado por el quejoso. Vista la sentencia del Juzgado de Distrito que denegó el amparo, con todo lo demás que de autos consta, ver convino y se tuvo presente, se decreta: que por sus propios legales fundamentos, es de confirmarse y se confirma la sentencia dictada por el expresado Juez de Distrito de Guanajuato en 26 de Mayo próximo pasado, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Francisco Chavez, contra la sentencia de muerte que le ha impuesto la 2ª Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y contra cuya disposicion se ha intentado el presente juicio de amparo.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; pu-



blíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—José M. Arteaga.—P. Ordaz.—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—José García Ramírez.—L. Guzman.—Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 11 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## COMPETENCIA

*Promovida por el Juez primero de Distrito de esta Capital al quinto de lo civil de la misma, para conocer de la demanda que en juicio ejecutivo sobre pesos, ha entablado D. Pedro Gutierrez contra Doña Agapita Arteaga.*

PEDIMENTO DEL C. FISCAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

El fiscal dice: que en el año de 1867 se presentó ante el juzgado quinto de lo civil, el Sr. D. Pedro Gutierrez, demandando por medio de su apoderado el Lic. Sanchez Gavito, á la Srita. D<sup>a</sup> Agapita Arteaga, la cantidad de un mil pesos que mediante escritura pública le fueron prestados por el referido Gutierrez con hipoteca especial de la casa número 3 de la calle de la Alegría de esta ciudad.

El juicio se intentó, como era natural, por la vía ejecutiva. Ese juicio habia llegado al estado de señalarse ya día para la tercera almoneda, cuando se presentó el C. Evaristo

Arteaga interponiendo una terceria de dominio excluyente. La fundaba en que él habia redimido al gobierno la casa número 3 en cuestion, pues esa finca habia pertenecido al clero.

El C. Arteaga recusó en este negocio al juez quinto, y no admitida esa recusacion, el C. Arteaga insistió en ella quedando pendiente la resolusion de este punto, á consecuencia del nuevo giro que tomó el asunto.

En efecto, á los pocos días de los hechos que se dejan mencionados, ocurrió el C. Evaristo Arteaga al ministerio de Hacienda manifestándole la existencia del juicio ejecutivo que Gutierrez seguia contra la Sra. Arteaga, y que estaba á punto de rematarse la casa número 3 de la calle de la Alegría. Que en esa casa el fisco tenia un interes muy directo, porque el exponente no habia aun entregado la mayor parte del precio de la redencion, y la finca mencionada estaba especialmente hipotecada á ese pago; que en esa virtud ocurría al Ministerio para que el negocio se ventilara ante los Tribunales federales. El ministerio entonces remitió el ocurso de Arteaga al promotor fiscal, y este funcionario se presentó al juzgado primero de Distrito pidiendo se reclamara el conocimiento del juicio promovido por D. Pedro Gutierrez á la Señorita Arteaga.

El juzgado de Distrito para mejor proveer en definitiva, pidió al ministerio de Hacienda copia de las diligencias relativas á la redencion hecha por el C. Evaristo Arteaga de la finca cuestionada. El ministerio obsequió esa peticion.

De esas copias aparece, que el C. Arteaga redimió al Supremo Gobierno, y en los términos que indica la liquidacion de fojas 13 del cuaderno tercero, la casa número 3 de la calle de la Alegría; que segun la clausula tercera de la escritura respectiva; el C. Arteaga quedó debiendo el precio, y por la cuarta, que esa casa la vendia el gobierno, en el concepto de que estaba libre de todo gravámen. Así es que, si alguno